

CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, A 24 DE FEBRERO DE 2022.

**ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA FUNCIONANDO EN PLENO, POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS JUZGADOS DE ORALIDAD FAMILIAR DEL ESTADO.**

**CONSIDERANDO**

I. El acceso a la justicia se trata de un derecho humano que garantiza que toda persona tenga la posibilidad de acudir a tribunales independientes e imparciales, a fin de hacer valer sus derechos y obtener una resolución de manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos por las leyes.

Esa garantía fundamental tiene sustento en el artículo 17 Constitucional, así como en diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país.

Entre ellos, destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que en su artículo 10 prevé que toda persona será oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación penal.

En el mismo sentido, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que todas las personas son iguales ante los tribunales y las cortes de justicia, y tendrán derecho a ser oídas públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación.

Otro instrumento internacional que consagra el acceso a la justicia, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 8.1 determina el derecho de toda persona de ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Asimismo, el artículo 25.1 de esa Convención, prevé la obligación del Estado de conceder un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de los derechos fundamentales.

En relación con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también ha sostenido en jurisprudencia que la garantía de acceso efectivo a la justicia deriva, entre otros, de los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Entre los criterios donde así lo ha decidido, se encuentra el publicado bajo el rubro: **“DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN”**, con número de registro 2015591, de modo que al emitirlo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter de vinculante, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

De esta manera, el acceso a la justicia se prevé como un derecho humano fundamental con reconocimiento nacional e internacional, y por lo tanto, su garantía representa una obligación para todas las autoridades del Estado.

Existen elementos indispensables que garantizan este principio, uno de ellos es la modernización del sistema judicial con la adopción de herramientas tecnológicas que contribuyan a la prestación del servicio con mayor rapidez, facilidad y eficiencia.

En efecto, los medios electrónicos agilizan la labor de los funcionarios judiciales, pues con el uso de plataformas digitales se automatizan los procesos de gestión, tales como la integración digital de los expedientes y carpetas, la generación automática de listas, cédulas y rutas de notificación, así como el uso de registros virtuales, contribuyendo a su celeridad y eficacia.

También, estos medios permiten acercar servicios a la ciudadanía para realizar sus trámites, presentar promociones, conocer sus resoluciones, informarse del estado de sus procedimientos vía remota, etc.

Ahora, si bien los elementos referidos (así como otros) son de suma importancia para lograr el acceso a una tutela judicial efectiva, lo que para este Acuerdo adquiere mayor relevancia es consolidar una administración de justicia oral familiar pronta y expedita, mediante la tramitación de procedimientos ágiles, eficientes y eficaces.

II. En ese sentido, se destaca que en materia de administración de justicia, es primordial garantizar la protección del goce y ejercicio de los derechos de los integrantes de la familia.

Esa importancia, se encuentra consagrada en Tratados Internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 16, numeral 3, señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, con derecho a la protección del Estado.

Por su parte, el artículo 4 Constitucional también garantiza el amparo a la organización y desarrollo de la familia.

En cuanto al derecho familiar, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, lo define como el conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, los Tratados Internacionales, las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social.

Esto, tal y como se advierte de la jurisprudencia bajo el rubro: **“DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO”**, con número de registro 162604, emitida por el Tribunal referido, criterio que si bien no es vinculante para las autoridades del Estado de Puebla, si es orientador, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

De lo anterior, se destaca la trascendencia de la materia familiar, en tanto que involucra la protección de los menores, incapaces, mujeres y adultos mayores.

Es más, el artículo 677 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, establece que las cuestiones familiares son de orden público.

Además, en su fracción I, inciso b), otorga a las autoridades judiciales facultades discrecionales para resolver esas controversias, debiendo en todo caso procurar la preservación del núcleo familiar, y también prevé que cuando esto no sea posible, deberá atenderse preferentemente al interés de las niñas, niños y adolescentes, incapaces, discapacitados y por último, al de los demás miembros.

Por consiguiente, los juzgadores se encuentran facultados para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, y de cuestiones relacionadas con la violencia intrafamiliar, pudiendo decretar las medidas necesarias para preservar y proteger los derechos de los integrantes más vulnerables.

Respecto a su importancia, se reitera que el derecho de familia es de orden social, pues en los problemas que plantea, se encuentran no solo intereses patrimoniales o económicos, como en el caso del civil o el mercantil, sino valores como la unidad familiar y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Véase, tiende a proteger derechos trascendentales como la filiación, alimentación, convivencia entre padres e hijos, integridad de los miembros más vulnerables, entre otros.

En ese sentido, las controversias inherentes a la familia son una prioridad de orden público, cuya solución es de naturaleza urgente e inaplazable.

**III.** Cabe aquí agregar, que en cumplimiento a la obligación del Poder Judicial de velar justamente por los derechos humanos de los miembros de la familia, especialmente de aquellos en situación de atención prioritaria; que se han implementado diversas estrategias para el fortalecimiento de la justicia familiar (como se pretende con éste acuerdo) asumiéndola como política prioritaria de acción.

Es importante establecer como referencia, que el artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para determinar los asuntos que podrán ser sometidos, conocidos y resueltos a través del juicio oral sumarísimo.

Así, dada la importancia social de los asuntos familiares y con la finalidad de dar agilidad y transparencia a la tramitación de los procedimientos con mayor índice en dicha materia, mediante Acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó que los juicios de divorcio incausado, alimentos y los de guarda y custodia provisional o definitiva, dentro de los que están comprendidos los de visita y convivencia, sean sometidos, conocidos y resueltos a través del juicio oral sumarísimo.

En atención a ello, por Acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, determinó la creación y operatividad del Juzgado de Oralidad en materia familiar del distrito judicial de Puebla, con competencia para conocer de los referidos juicios, determinados por el Pleno de este Tribunal.

Por otra parte, mediante Acuerdos de veintinueve de octubre del año anterior, este Órgano Colegiado instruyó la creación del cargo de Administradora o Administrador del Juzgado de Oralidad Familiar y estableció sus atribuciones.

Además, determinó que estos Órganos Jurisdiccionales contarán al menos con dos Jueces, un Administrador, y el número de Secretarios de Acuerdos, Diligenciaros y Personal Administrativo necesarios para su eficaz funcionamiento.

Aunado a ello, adscribió más operadores al Juzgado de Oralidad en Materia Familiar del distrito judicial de Puebla, y ordenó el traslado de dicho Órgano Jurisdiccional a la sede que ocupaba el Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar.

**IV.** Es importante destacar que en términos de lo establecido por el artículo 754 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el procedimiento oral sumarísimo se rige bajo los principios de oralidad, publicidad, igualdad, intermediación, contradicción, continuidad y concentración.

Por su trascendencia, se destaca que el principio de intermediación consiste en que el Juzgador tenga una íntima vinculación personal con las partes y los elementos de prueba. Ese conocimiento directo, le permitirá pronunciar sentencias más justas, esto es, apegadas a la verdad real.

Desde este enfoque, el principio de intermediación demanda que el Juez que presencié el desahogo de las pruebas, sea quien dicte la sentencia definitiva, ya que el contacto personal y directo con el material probatorio lo ubica en una situación idónea para fallar el asunto.

Por ejemplo, su presencia en las audiencias le proporciona las condiciones óptimas para percibir una serie de elementos que acompañan a las palabras de los comparecientes, como el manejo del tono, volumen o cadencia de la voz, pausas, titubeos, disposición del cuerpo, dirección de la mirada, etc.

De tal manera que gracias a la intermediación con la prueba, puede formarse una imagen completa del contenido y exactitud de lo expuesto, para luego motivar su valor y alcance probatorio.

Si bien este principio es relevante para la solución de los juicios de cualquier materia, resulta esencial su observancia en los procedimientos familiares, pues como se explicó, se encuentran en pleito valores trascendentales como el del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

En relación con lo anterior, el artículo 4 Constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

También, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, prioriza los derechos y libertades de los menores de edad, de acuerdo al principio del interés superior de la niñez, tal y como se advierte de su artículo 18.



Por tanto, como parte de esa tutela, se encuentra el garantizar el derecho de los menores para participar en los procedimientos judiciales que los involucren.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el contenido y alcance del derecho que tienen las niñas y niños a participar en los procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar su esfera jurídica, de conformidad a la protección que les ofrece la legislación nacional y los tratados internacionales.

Lo cual se desprende de la jurisprudencia bajo el rubro: **“DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO”**, con número de registro 2013952, criterio vinculante al emitirlo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

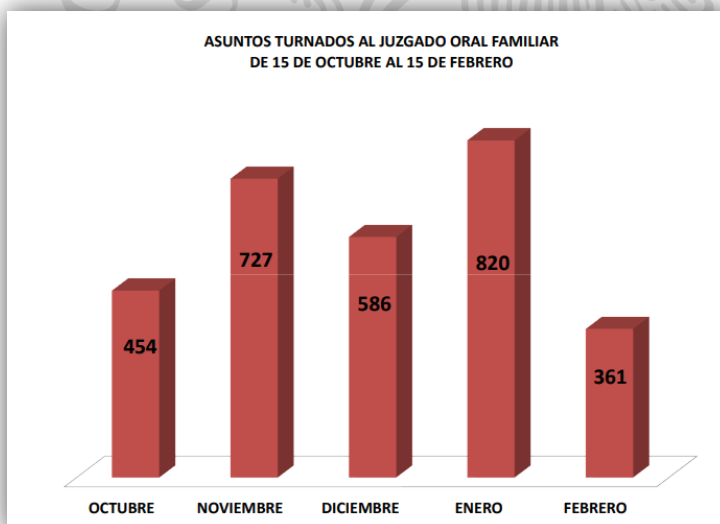
Así, la comunicación con los niños es un elemento fundamental, pues escucharlos le permitirá al Juez tomar en consideración sus opiniones e inquietudes al dictar la sentencia.

Bajo esa perspectiva, el nuevo modelo de justicia familiar oral permite al Juez considerar la impresión recibida directamente de los menores, las partes y de los que intervienen en las audiencias para resolver el conflicto, así como hacer que los justiciables conozcan de manera clara y en un lenguaje accesible sus resoluciones.

Se destaca que el lenguaje claro jurídico consiste en emitir resoluciones judiciales utilizando palabras, conceptos y estructura accesibles y simples, con el fin de que sean entendibles para el ciudadano.

**V.** Con base en lo expuesto, a través del sistema de oralidad familiar, la ciudadanía tiene mayor y mejor acceso a la justicia pronta y transparente.

En relación con lo referido, es importante destacar que los turnos asignados al Juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla, a partir de su entrada en función (quince de octubre del dos mil veintiuno), al quince de febrero del dos mil veintidós corresponden a **2948**, tal y como se ilustra:



La estadística muestra la tendencia al aumento en el número de asuntos turnados al Juzgado de oralidad familiar.

En esa razón, para responder a las condiciones actuales y necesidades de la ciudadanía, se requiere que estos Órganos cuenten con un modelo novedoso, funcional y efectivo de organización y gestión interna, que se encuentre sustentado en la automatización de sus procesos, la profesionalización de su personal, así como que contemple la tecnología necesaria para la eficaz prestación de sus servicios.

También para el mismo efecto, se requiere de la adecuación de la dinámica con la que los procedimientos orales en materia familiar se han venido desahogando, porque su práctica refleja esa necesidad para lograr una pronta y eficaz administración de justicia.

**VI.** Consecuentemente, es conveniente que este Consejo determine los lineamientos para el funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Familiar del Estado, en uso de las facultades concedidas a este Órgano Colegiado para dictar las medidas convenientes para que la administración de justicia sea expedita, pronta, imparcial y gratuita, y para emitir los acuerdos necesarios para normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los medios electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, que garanticen su seguridad y conservación, así como para determinar el acceso del público a la información contenida en las bases de datos. Atribuciones previstas por las fracciones XXI y XXIV del artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

**VII.** Así, deben determinarse entonces los lineamientos para el funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Familiar del Estado, que les permita garantizar una impartición de justicia más ágil, oportuna y transparente, y que brinde certeza de los procedimientos a la ciudadanía.

En ese sentido, tenemos que la función judicial requiere cumplir, entre otros, con los principios de excelencia, honestidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, por lo que es indispensable que el personal judicial cuente con los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para desarrollar óptimamente su labor, por lo que además de ser abogados, constantemente deberán actualizarse mediante el estudio de los textos legales y sus reformas, la jurisprudencia, los tratados internacionales, etc.

Por otra parte, se reitera la determinación de este Consejo de catorce de octubre del dos mil veintiuno, en cuanto a que el horario que regirá el desahogo de las audiencias de los juicios orales sumará en materia familiar, así como la atención de los operadores judiciales, será de las ocho treinta a las diecisiete treinta horas.

No obstante, las Juezas y Jueces, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos y la urgencia, podrán celebrar audiencias a partir de las siete horas, así como habilitar días y horas inhábiles para el desahogo de las comparecencias, lo que harán del conocimiento de la Administración del Juzgado a través del correo electrónico institucional [jofpuebla@htsjpuebla.gob.mx](mailto:jofpuebla@htsjpuebla.gob.mx), a fin de que coordine la disposición de las salas de oralidad.

En esa razón, debe instruirse al Director de Informática y a la Administración del Juzgado de Oralidad Familiar, para que exista una coordinación que permita a las Juzgadas y Juzgadores contar con la disposición de las salas de oralidad, en los horarios que se habiliten

para el desahogo de las audiencias; y para que igual hagan lo propio para la atención de las comparecencias en las que se formulan las demandas, para que éstas se practiquen por turnos asignados a las Juezas y Jueces, equitativa y aleatoriamente, por el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, de tal manera que se garantice atención pronta, expedita y oportuna a la ciudadanía.

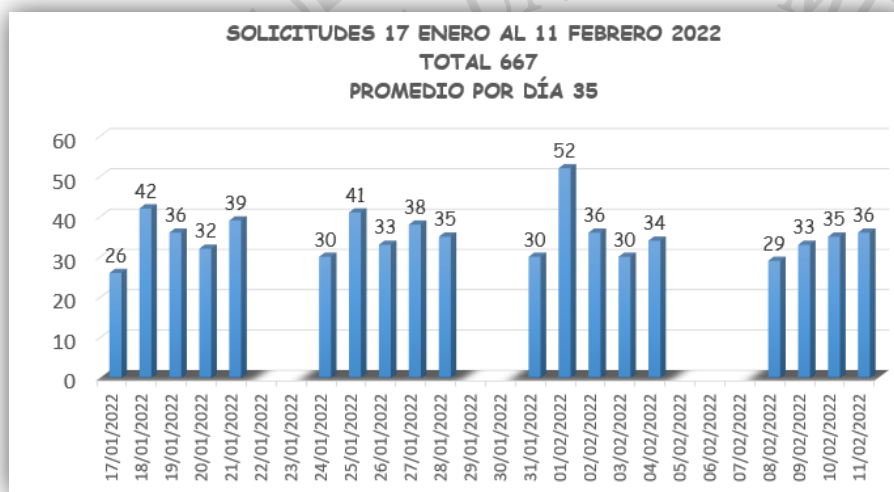
Así, de acuerdo a las necesidades del servicio, este Consejo debe determinar el número de turnos, los horarios que comprenderá cada uno, y las salas asignadas para el desahogo de las audiencias, y en esa virtud se propone:

Con base en la agenda integrada en el Sistema, cada Juzgadora y Juzgador programará sus demás audiencias (reagendadas, juntas de avenencia, conciliaciones, especiales, contestaciones de demanda, desahogo de pruebas, etc.), fuera del turno aleatorio asignado por el referido Sistema.

Lo anterior, permitirá la atención prioritaria que requiere la materia, en los términos legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, para el desahogo de las etapas procesales del juicio oral sumarísimo.

Esto, toda vez que la estadística generada por el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, muestra que la Oficialía de Partes Común de la ciudad de Puebla, recibe al día un promedio de treinta y cinco solicitudes de comparecencias turnadas al Juzgado de oralidad familiar.

La siguiente gráfica muestra el número de solicitudes recibidas durante el periodo del diecisiete de enero al once de febrero del año en curso:



Ahora, se destaca que en términos de la parte considerativa del Acuerdo de este Consejo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, las audiencias se agendan cada treinta minutos, de las ocho treinta a las diecisiete treinta horas.

Por lo tanto, el esquema de trabajo establecido, permitirá que en cada sala se programen un total de diecinueve audiencias de comparecencia por día.

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:30					
9:00					
9:30					
10:00					
10:30					
11:00					
11:30					
12:00					
12:30					
13:00					
13:30					
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00					
16:30					
17:00					
17:30					

Así, al considerar que actualmente el Juzgado de oralidad familiar tiene asignadas tres salas de oralidad, se permitiría programar hasta 57 audiencias de comparecencia por día.

Con lo anterior se reitera, que se logrará atender de manera pronta, inmediata y oportuna el número promedio de comparecencias (treinta y cinco por día), además de que de acuerdo a la estadística mostrada, existe tendencia al aumento en las solicitudes presentadas diariamente.

Además, se destaca que el Juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla cuenta con dos salas con equipo de videograbación, por lo que con el objeto de eficientar su uso, debe ordenarse sean ocupadas para el desahogo de las comparecencias en las que se formulan las demandas, o aquellas que resulte conveniente de acuerdo al espacio con el que cuentan.

Por otra parte, para la atención sin demoras y el oportuno desarrollo de las audiencias, debe determinarse que los datos generales de los comparecientes se tomen durante el desahogo de éstas y no antes de iniciarlas, para evitar que las audiencias se retrasen, dado que tomar los datos generales antes de entrar a la sala de oralidad, ha provocado que no se inicien a la hora programada, e incluso que se prolonguen en el tiempo asignado para su desahogo, ocasionando retraso en las comparecencias subsecuentes.

Para el mismo efecto, debe tenerse presente que los Tribunales de lo Familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, por lo que en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros.

En ese sentido, se destaca lo establecido por los artículos 398 y 677 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que determinan esto:

**“Artículo 398.** El Tribunal deberá suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados:

*I. Cuando el juicio verse sobre derechos que pudieren afectar el interés de la familia;*

*II. Cuando intervengan por lo menos un menor como parte, si por falta de esa suplencia pudieran verse afectados su estado civil o su patrimonio...”*

**“Artículo 677.** Los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y se registrarán por las disposiciones siguientes:

*(...)*

*VII. Para la investigación de la verdad, se podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes...”*

Es claro, en materia familiar el juzgador debe intervenir de oficio, en aras de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el de los miembros más vulnerables.

En relación con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia, que la facultad del juzgador para allegarse oficiosamente de pruebas, adquiere relevancia y se convierte en obligación cuando están involucrados intereses de niñas, niños o adolescentes.

Esto, tal y como se advierte del criterio bajo el rubro: **“PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ)”**, con número de registro 2007719, de modo que al emitirlo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter de vinculante, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Bajo esa consideración, las Juezas y Jueces de oralidad familiar deben ordenar de manera oficiosa, los actos procesales necesarios para el efectivo desarrollo de las audiencias.

Lo anterior, implica por parte de las Juezas y Jueces, el seguimiento de los asuntos y la emisión de las determinaciones que permitan contar con la información que consideren necesaria para el efectivo desahogo de las audiencias.

Por ejemplo, el seguimiento al oficio ordenado al empleador del demandado en juicio de alimentos, para que informe el salario que percibe éste último, lo que implica incluso la realización de nuevos requerimientos o la imposición de medidas de apremio, para que en la audiencia programada para ese fin, la Jueza o Juez se encuentre en posibilidad de fijar una pensión alimenticia provisional.

Eso sin soslayar que en los juicios de tipo oral, la substanciación de los procedimientos se realiza a través de un sistema de audiencias, lo que no implica que las Juezas y Jueces dejen de acordar de forma inmediata y fuera de audiencia, los escritos de mero trámite, o bien,



aquellos que requieran atención pronta y oportuna, a efecto de efficientar el desahogo de las audiencias.

Un ejemplo de este tipo de promociones, son las relativas a la nueva designación de abogado patrono y solicitud de expedición de copias de las carpetas, o bien, de los discos que contienen la grabación de las audiencias, a fin de que el nuevo abogado se encuentre en posibilidad de brindar una debida defensa a su patrocinado.

Además, con el objetivo de optimizar la operatividad del desahogo de las audiencias y el despacho de los asuntos, mediante un esquema ágil, oportuno, efectivo y eficiente, cada Jueza y Juez actuarán con un Secretario de Acuerdos, de la siguiente manera:

JUEZA/JUEZ	SECRETARIA(O) DE ACUERDOS
<b>Jaqueline Oviedo Hernández</b>	Gianelli García Juárez
<b>Adolfo Hernández Martínez</b>	Rafael Vázquez Isidro
<b>Minerva Nikteha Mejía Pérez</b>	Maribel Sampedro Ramírez
<b>María de los Ángeles Muñoz Cortés</b>	María Erika Pérez Montes
<b>Blanca Laura Ollivier Palacios</b>	Karina Santos Barroso
<b>Alberto Gutiérrez Ríos</b>	Blanca Elizabeth Martínez Anguiano
<b>Carlos Sánchez Hernández</b>	Marco Antonio Arsencio Espinoza
<b>Marco Antonio Gabriel González Alegría</b>	Adolfo Guarneros Marín
<b>Rogelio Pérez Sánchez</b>	Ana Karen Ríos Saucedo

También, para garantizar eficiencia y agilidad de los procedimientos, los Secretarios de Acuerdos asignados a cada Juez elaborarán inmediatamente el memorial de las audiencias, además de los oficios, citatorios, exhortos y cartas rogatorias, desahogarán el trámite para la devolución de los documentos, realizarán los actos procesales y administrativos para la entrega de copias simples o certificadas de las carpetas, o bien, copia del disco compacto de las audiencias, y se ocuparán de generar las fichas de depósito, así como los oficios para las órdenes de pago.

Para lo anterior, los Secretarios de Acuerdos contarán con el apoyo de personal judicial, cuya supervisión se encontrará a cargo de la Administración del Juzgado.

También, con el propósito de optimizar el desahogo de las audiencias, existirá personal encargado del seguimiento a los exhortos, cuya supervisión corresponderá a la Administración, esto, una vez que se apruebe la partida presupuestal correspondiente.

En la misma línea de eficiencia, agilidad, y para la automatización y mejora de sus procesos, el personal de los Juzgados de Oralidad Familiar del Estado actuará desde el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial.

Consecuentemente, durante las audiencias, las Secretarías y los Secretarios de Acuerdos trabajarán con la plantilla de datos que integra el Sistema, asegurándose de registrar la información completa.

El personal judicial accederá al Sistema para el ejercicio de sus atribuciones, a través del usuario y contraseña que le proporcione la Dirección de Informática, los cuales serán únicos e intransferibles, por lo que su uso indebido causará responsabilidad administrativa.

Los operadores judiciales cumplirán con lo siguiente:

1. Registrar el proceso de los juicios, mediante la captura diaria de los datos que aseguren la actualización permanente y veracidad de la información contenida en el Sistema.
2. Verificar el correcto y completo registro de la información solicitada en los diversos campos de los módulos del Sistema.
3. Verificar la integridad y legibilidad de los archivos electrónicos que publican, digitalizan y notifican.
4. Integrar la totalidad de sus actuaciones a la carpeta electrónica, de tal manera que coincida con las constancias de la carpeta física.
5. Realizar los procesos de acuerdo a la especificación del funcionamiento de los módulos del Sistema, considerando sus modificaciones o ampliaciones.
6. Digitalizar todas las promociones y documentos que recepcionen asegurándose de la buena calidad de la imagen.

La información requerida, así como la normatividad para registrar los datos que exige el Sistema, se adecuará conforme lo determine la experiencia de su operatividad y la ampliación de sus servicios y funciones, y de acuerdo a la dinámica social.

La Dirección de Informática será la responsable de la capacitación, implementación, actualización, supervisión, debido funcionamiento y mantenimiento del Sistema, por lo tanto, estará encargada de solucionar de forma inmediata cualquier problema técnico.

Por otra parte, se determina la integración de la carpeta electrónica, la cual contendrá las mismas constancias y documentos que la física, guardando idéntico orden cronológico.

De modo que los documentos presentados en físico que no se agreguen a la carpeta, tampoco constarán electrónicamente, tales como las copias del traslado, folders, micas presentadas únicamente para la protección de los documentos que se ingresen, etc.

De la misma forma, las promociones electrónicas deberán imprimirse y agregarse de manera física, para que consten en ambas carpetas.

Bajo esa consideración, los operadores judiciales integrarán la totalidad de sus actuaciones a la carpeta electrónica, de tal manera que coincida con las constancias de la carpeta física.

Por ello, los Diligenciaros están obligados a publicar la totalidad de sus actuaciones.

Además, para evitar la duplicidad del trabajo de los Diligenciaros, existirá una central que organizará la práctica de las notificaciones mediante el diseño de rutas óptimas y la asignación de éstas a cada notificador, a fin de que se realice el mayor número en el menor tiempo posible.

La generación automática de listas y cédulas de notificación, así como la ubicación de domicilios para la planificación de rutas óptimas, también se realizará desde el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial.



Aunado a lo anterior, se determina la implementación del Sistema de Estadística Judicial en Oralidad Familiar, que contemple, incluso, los tiempos de duración de los procedimientos.

Esto, permitirá contar con elementos para la toma de decisiones, tales como la planeación en materia de necesidades de los Juzgados, personal, capacitación o salas de audiencias, además brindará la posibilidad de resolver las diversas peticiones de información requerida por las organizaciones, organismos, comisiones, instituciones y autoridades nacionales e internacionales, permitiendo un sistema de impartición de justicia de calidad.

De esta manera, para garantizar una mayor apertura de la función judicial con transparencia y facilidad de acceso, se habilitará en la página oficial de este Tribunal, el micrositio de búsqueda y consulta de estadística judicial oral familiar.

Las partes, sus representantes y abogados, podrán acceder al Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, a través del banner disponible en el sitio web de este Tribunal, para la prestación de servicios tales como consulta de carpetas, envío de promociones, notificación electrónica de las resoluciones, entre otros.

Por lo tanto, debe instruirse al Director de Informática para que adecúe los módulos del Sistema a las necesidades que se requieran, y además, se ocupe de la capacitación del personal judicial.

Este Consejo debe instruir al Director General y Secretario Jurídico como los encargados de la correcta implementación de las medidas necesarias para la ejecución de este Acuerdo.

En ese sentido, se emite el presente Acuerdo en los términos siguientes:

**Primero.** Se determinan los lineamientos para el funcionamiento de los Juzgados de Oralidad Familiar del Estado, que les permita garantizar una impartición de justicia más ágil, oportuna y transparente, que brinde certeza de los procedimientos a la ciudadanía.

**Segundo.** La función judicial requiere cumplir, entre otros, con los principios de excelencia, honestidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, por lo que es indispensable que el personal judicial cuente con los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para desarrollar óptimamente su labor, por lo que además de ser abogados, constantemente deberán actualizarse mediante el estudio de los textos legales y sus reformas, la jurisprudencia, los tratados internacionales, etc.

**Tercero.** Se reitera la determinación de este Consejo de catorce de octubre del dos mil veintiuno, en cuanto a que el horario que regirá el desahogo de las audiencias de los juicios orales sumarísimos en materia familiar, así como la atención de los operadores judiciales, será de las ocho treinta a las diecisiete treinta horas.

No obstante, las Juezas y Jueces, de acuerdo a la naturaleza de los asuntos y la urgencia, podrán celebrar audiencias a partir de las siete horas, así como habilitar días y horas inhábiles para el desahogo de las comparecencias, lo que harán del conocimiento de la Administración del Juzgado a través del correo electrónico institucional [jofpuebla@htsjpuebla.gob.mx](mailto:jofpuebla@htsjpuebla.gob.mx), a fin de que coordine la disposición de las salas de oralidad.

**Cuarto.** Se instruye al Director de Informática y a la Administración del Juzgado de Oralidad Familiar, para que exista una coordinación que permita a las Juzgadoras y Juzgadores contar con la disposición de las salas de oralidad, en los horarios que se habiliten para el desahogo de las audiencias; y para que igual hagan lo propio para la atención de las comparecencias en las que se formulan las demandas, para que éstas se practiquen por turnos asignados a las Juezas y Jueces, equitativa y aleatoriamente, por el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, de tal manera que se garantice atención pronta, expedita y oportuna a la ciudadanía.

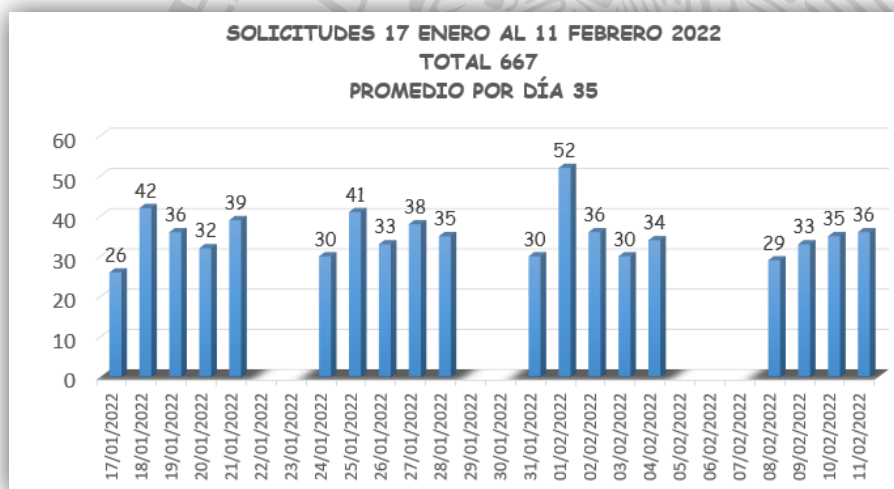
**Quinto.** De acuerdo a las necesidades del servicio, este Consejo determinará el número de turnos, los horarios que comprenderá cada uno, y las salas asignadas para el desahogo de las audiencias.

**Sexto.** Con base en la agenda integrada en el Sistema, cada Juzgadora y Juzgador programará sus demás audiencias (reagendadas, juntas de avenencia, conciliaciones, especiales, contestaciones de demanda, desahogo de pruebas, etc.), fuera del turno aleatorio asignado por el referido Sistema.

Lo anterior, permitirá la atención prioritaria que requiere la materia, en los términos legales que establece el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, para el desahogo de las etapas procesales del juicio oral sumarísimo.

Esto, toda vez que la estadística generada por el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, muestra que la Oficialía de Partes Común de la ciudad de Puebla, recibe al día un promedio de treinta y cinco solicitudes de comparecencias turnadas al Juzgado de oralidad familiar.

La siguiente gráfica muestra el número de solicitudes recibidas durante el periodo del diecisiete de enero al once de febrero del año en curso:



Ahora, se destaca que en términos de la parte considerativa del Acuerdo de este Consejo de catorce de octubre de dos mil veintiuno, las audiencias se agendan cada treinta minutos, de las ocho treinta a las diecisiete treinta horas.

Por lo tanto, el esquema de trabajo establecido, permitirá que en cada sala se programen un total de diecinueve audiencias de comparecencia por día.

Horario	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8:30					
9:00					
9:30					
10:00					
10:30					
11:00					
11:30					
12:00					
12:30					
13:00					
13:30					
14:00					
14:30					
15:00					
15:30					
16:00					
16:30					
17:00					
17:30					

Así, al considerar que actualmente el Juzgado de oralidad familiar tiene asignadas tres salas de oralidad, se permitiría programar hasta 57 audiencias de comparecencia por día.

Con lo anterior se reitera, que se logrará atender de manera pronta, inmediata y oportuna el número promedio de comparecencias (treinta y cinco por día), además de que de acuerdo a la estadística mostrada, existe tendencia al aumento en las solicitudes presentadas diariamente.

**Séptimo.** Además, se destaca que el Juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla cuenta con dos salas con equipo de videograbación, por lo que con el objeto de eficientar su uso, se ordena sean ocupadas para el desahogo de las comparecencias en las que se formulan las demandas, o aquellas que resulte conveniente de acuerdo al espacio con el que cuentan.

**Octavo.** Por otra parte, para la atención sin demoras y el oportuno desarrollo de las audiencias, debe determinarse que los datos generales de los comparecientes se tomen durante el desahogo de éstas y no antes de iniciarlas, para evitar que las audiencias se retrasen, dado que tomar los datos generales antes de entrar a la sala de oralidad, ha provocado que no se inicien a la hora programada, e incluso que se prolonguen en el tiempo asignado para su desahogo, ocasionando retraso en las comparecencias subsecuentes.

**Noveno.** Para el mismo efecto, debe tenerse presente que los Tribunales de lo Familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia,

especialmente tratándose de niñas, niños y adolescentes, por lo que en ejercicio de esa facultad decretarán las medidas que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros.

En ese sentido, se destaca lo establecido por los artículos 398 y 677 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, que determinan esto:

***“Artículo 398. El Tribunal deberá suplir la falta de agravios o la deficiencia de los expresados:***

***I. Cuando el juicio verse sobre derechos que pudieren afectar el interés de la familia;***

***II. Cuando intervengan por lo menos un menor como parte, si por falta de esa suplencia pudieran verse afectados su estado civil o su patrimonio...”***

***“Artículo 677. Los procedimientos sobre cuestiones familiares son de orden público y se registrarán por las disposiciones siguientes:***

***(...)***

***VII. Para la investigación de la verdad, se podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes...”***

Es claro, en materia familiar el juzgador debe intervenir de oficio, en aras de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, así como el de los miembros más vulnerables.

En relación con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia, que la facultad del juzgador para allegarse oficiosamente de pruebas, adquiere relevancia y se convierte en obligación cuando están involucrados intereses de niñas, niños o adolescentes.

Esto, tal y como se advierte del criterio bajo el rubro: **“PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ)”**, con número de registro 2007719, de modo que al emitirlo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene el carácter de vinculante, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.

Bajo esa consideración, las Juezas y Jueces de oralidad familiar deben ordenar de manera oficiosa, los actos procesales necesarios para el efectivo desarrollo de las audiencias.

Lo anterior, implica por parte de las Juezas y Jueces, el seguimiento de los asuntos y la emisión de las determinaciones que permitan contar con la información que consideren necesaria para el efectivo desahogo de las audiencias.

Por ejemplo, el seguimiento al oficio ordenado al empleador del demandado en juicio de alimentos, para que informe el salario que percibe éste último, lo que implica incluso la realización de nuevos requerimientos o la imposición de medidas de apremio, para que en la

audiencia programada para ese fin, la Jueza o Juez se encuentre en posibilidad de fijar una pensión alimenticia provisional.

Eso sin soslayar que en los juicios de tipo oral, la substanciación de los procedimientos se realiza a través de un sistema de audiencias, lo que no implica que las Juezas y Jueces dejen de acordar de forma inmediata y fuera de audiencia, los escritos de mero trámite, o bien, aquellos que requieran atención pronta y oportuna, a efecto de eficientar el desahogo de las audiencias.

Un ejemplo de este tipo de promociones, son las relativas a la nueva designación de abogado patrono y solicitud de expedición de copias de las carpetas, o bien, de los discos que contienen la grabación de las audiencias, a fin de que el nuevo abogado se encuentre en posibilidad de brindar una debida defensa a su patrocinado.

**Décimo.** Además, con el objetivo de optimizar la operatividad del desahogo de las audiencias y el despacho de los asuntos, mediante un esquema ágil, oportuno, efectivo y eficiente, cada Jueza y Juez actuarán con un Secretario de Acuerdos, de la siguiente manera:

JUEZA/JUEZ	SECRETARIA(O) DE ACUERDOS
<b>Jaqueline Oviedo Hernández</b>	Gianelli García Juárez
<b>Adolfo Hernández Martínez</b>	Rafael Vázquez Isidro
<b>Minerva Nikteha Mejía Pérez</b>	Maribel Sampedro Ramírez
<b>María de los Ángeles Muñoz Cortés</b>	María Erika Pérez Montes
<b>Blanca Laura Ollivier Palacios</b>	Karina Santos Barroso
<b>Alberto Gutiérrez Ríos</b>	Blanca Elizabeth Martínez Anguiano
<b>Carlos Sánchez Hernández</b>	Marco Antonio Arsencio Espinoza
<b>Marco Antonio Gabriel González Alegría</b>	Adolfo Guarneros Marín
<b>Rogelio Pérez Sánchez</b>	Ana Karen Ríos Saucedo

**Décimo primero.** También, para garantizar eficiencia y agilidad de los procedimientos, los Secretarios de Acuerdos asignados a cada Juez elaborarán inmediatamente el memorial de las audiencias, además de los oficios, citatorios, exhortos y cartas rogatorias, desahogarán el trámite para la devolución de los documentos, realizarán los actos procesales y administrativos para la entrega de copias simples o certificadas de las carpetas, o bien, copia del disco compacto de las audiencias, y se ocuparán de generar las fichas de depósito, así como los oficios para las órdenes de pago.

Para lo anterior, los Secretarios de Acuerdos contarán con el apoyo de personal judicial, cuya supervisión se encontrará a cargo de la Administración del Juzgado.

**Décimo segundo.** También, con el propósito de optimizar el desahogo de las audiencias, existirá personal encargado del seguimiento a los exhortos, cuya supervisión corresponderá a la Administración, esto, una vez que se apruebe la partida presupuestal correspondiente.

**Décimo tercero.** En la misma línea de eficiencia, agilidad, y para la automatización y mejora de sus procesos, el personal de los Juzgados de Oralidad Familiar del Estado actuará desde el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial.

**Décimo cuarto.** Consecuentemente, durante las audiencias, las Secretarías y los Secretarios de Acuerdos trabajarán con la plantilla de datos que integra el Sistema, asegurándose de registrar la información completa.

**Décimo quinto.** El personal judicial accederá al Sistema para el ejercicio de sus atribuciones, a través del usuario y contraseña que le proporcione la Dirección de Informática, los cuales serán únicos e intransferibles, por lo que su uso indebido causará responsabilidad administrativa.

**Décimo sexto.** Los operadores judiciales cumplirán con lo siguiente:

1. Registrar el proceso de los juicios, mediante la captura diaria de los datos que aseguren la actualización permanente y veracidad de la información contenida en el Sistema.
2. Verificar el correcto y completo registro de la información solicitada en los diversos campos de los módulos del Sistema.
3. Verificar la integridad y legibilidad de los archivos electrónicos que publican, digitalizan y notifican.
4. Integrar la totalidad de sus actuaciones a la carpeta electrónica, de tal manera que coincida con las constancias de la carpeta física.
5. Realizar los procesos de acuerdo a la especificación del funcionamiento de los módulos del Sistema, considerando sus modificaciones o ampliaciones.
6. Digitalizar todas las promociones y documentos que recepcionen asegurándose de la buena calidad de la imagen.

**Décimo séptimo.** La información requerida, así como la normatividad para registrar los datos que exige el Sistema, se adecuará conforme lo determine la experiencia de su operatividad y la ampliación de sus servicios y funciones, y de acuerdo a la dinámica social.

**Décimo octavo.** La Dirección de Informática será la responsable de la capacitación, implementación, actualización, supervisión, debido funcionamiento y mantenimiento del Sistema, por lo tanto, estará encargada de solucionar de forma inmediata cualquier problema técnico.

**Décimo noveno.** Por otra parte, se determina la integración de la carpeta electrónica, la cual contendrá las mismas constancias y documentos que la física, guardando idéntico orden cronológico.

De modo que los documentos presentados en físico que no se agreguen a la carpeta, tampoco constarán electrónicamente, tales como las copias del traslado, folders, micas presentadas únicamente para la protección de los documentos que se ingresen, etc.

De la misma forma, las promociones electrónicas deberán imprimirse y agregarse de manera física, para que consten en ambas carpetas.

Bajo esa consideración, los operadores judiciales integrarán la totalidad de sus actuaciones a la carpeta electrónica, de tal manera que coincida con las constancias de la carpeta física.

Por ello, los Diligenciaros están obligados a publicar la totalidad de sus actuaciones.



**Vigésimo.** Además, para evitar la duplicidad del trabajo de los Diligenciaros, existirá una central que organizará la práctica de las notificaciones mediante el diseño de rutas óptimas y la asignación de éstas a cada notificador, a fin de que se realice el mayor número en el menor tiempo posible.

**Vigésimo primero.** La generación automática de listas y cédulas de notificación, así como la ubicación de domicilios para la planificación de rutas óptimas, también se realizará desde el Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial.

**Vigésimo segundo.** Aunado a lo anterior, se determina la implementación del Sistema de Estadística Judicial en Oralidad Familiar, que contemple, incluso, los tiempos de duración de los procedimientos.

Esto, permitirá contar con elementos para la toma de decisiones, tales como la planeación en materia de necesidades de los Juzgados, personal, capacitación o salas de audiencias, además brindará la posibilidad de resolver las diversas peticiones de información requerida por las organizaciones, organismos, comisiones, instituciones y autoridades nacionales e internacionales, permitiendo un sistema de impartición de justicia de calidad.

De esta manera, para garantizar una mayor apertura de la función judicial con transparencia y facilidad de acceso, se habilitará en la página oficial de este Tribunal, el micrositio de búsqueda y consulta de estadística judicial oral familiar.

**Vigésimo tercero.** Las partes, sus representantes y abogados, podrán acceder al Sistema Electrónico de Control y Gestión Judicial, a través del banner disponible en el sitio web de este Tribunal, para la prestación de servicios tales como consulta de carpetas, envío de promociones, notificación electrónica de las resoluciones, entre otros.

**Vigésimo cuarto.** Se instruye al Director de Informática para que adecúe los módulos del Sistema a las necesidades que se requieran, y además, se ocupe de la capacitación del personal judicial.

**Vigésimo quinto.** Este Consejo instruye al Director General y Secretario Jurídico como los encargados de la correcta implementación de las medidas necesarias para la ejecución de este Acuerdo.

### **TRANSITORIOS**

**Único.** Este Acuerdo entrará en vigor el día veintiocho de febrero de dos mil veintidós.

Comuníquese y Cúmplase.

**EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA  
FUNCIONANDO EN PLENO.**